

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 18º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-9212-2020
CARATULADO : GONZÁLEZ/ESTADO DE CHILE - CDE

Santiago, treinta y uno de Marzo de dos mil veintitrés

VISTOS:

Don Nelson Guillermo Caucoto Pereira y don Francisco Javier Ugás Tapia, abogados, ambos domiciliados en Doctor Sotero del Río N°326, oficina 1104, comuna de Santiago, compareciendo en representación de doña María Rebeca González Morán, pensionada, domiciliada en calle Manuel Rodríguez N° 2.553, comuna de Hijuelas, provincia de Quillota, deduce demanda de indemnización de daños y perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Juan Antonio Peribonio Poduje, abogado, ambos con domicilio en calle Agustinas n°1687, comuna de Santiago.

Funda la demanda en que doña María Rebeca González Morán, es hija de don Florentino Cruz y de doña Rosa Hilda Morán de González. A su vez, es hermana de don Raúl Francisco González Morán, víctima de una ejecución sumaria, como crimen de guerra y como crimen de lesa humanidad, cometida por agentes del Estado durante la dictadura cívico-militar ocurrida en nuestro país en el pasado reciente, siendo reconocido como víctima de violaciones a sus derechos humanos por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, también conocida como “Comisión Rettig”.

Para la época en que ocurren los hechos criminales que afectaron a su hermano don Raúl Francisco González Morán y que han causado un daño moral a la demandante, doña María Rebeca González Morán tenía 34 años y se encontraba casada don Luciano Francisco Abarca Armijo. En tanto, su hermano menor don Raúl Francisco González Morán tenía 31 años, era soltero y se desempeñaba como empleado en el Hospital San Juan de Dios, emplazado en la comuna y ciudad de Santiago, en la Región Metropolitana.

En relación a la ejecución sumaria en perjuicio del Sr. González Morán, menciona que la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, estableció que “(...) *conoció casos de ejecuciones practicadas en cumplimiento de una sentencia de muerte dictada previamente, o que se dijo se había dictado previamente, por un Consejo de Guerra. La Comisión considera estas ejecuciones violaciones de derechos humanos, sin entrar a pronunciarse sobre el problema más general de la legitimidad de la pena de muerte, por*



Foja: 1

cuanto faltaron en estos procesos, cuando efectivamente los hubo, las garantías mínimas de un juicio justo.

*También examinó la Comisión diversas modalidades de ejecuciones al margen de todo proceso. Estas se conocen técnicamente, en el lenguaje de las organizaciones internacionales, como **ejecuciones extra-judiciales o extra-legales**.*

Entre este tipo de ejecuciones, fue frecuente, durante los meses posteriores al 11 de septiembre de 1973, el empleo de la llamada "ley de la fuga". Las explicaciones oficiales más socorridas entregadas en estos casos, sostenían que los uniformados dispararon contra prisioneros que intentaban fugarse, y que no acataron la intimación de alto, a resulta de lo cual éstos murieron.

Aunque estas explicaciones hubieran sido verosímiles, no se habría justificado que se disparara a matar a quienes se habría podido someter de otro modo. Sin embargo, la Comisión encontró que estas explicaciones eran inverosímiles en todos los casos de la llamada "ley de la fuga" que examinó, y los estimó por tanto como ejecuciones al margen de todo proceso que se pretendieron justificar con una falsa versión de fuga. En algunos casos aislados, que se narran más adelante, las circunstancias son parcialmente diferentes, pero sin alterar el carácter ilícito de la muerte inferida por la autoridad."

Expresa que en la página 152 del Informe elaborado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, se registra que “Raúl Francisco GONZÁLEZ MORÁN, 31 años, funcionario del Hospital San Juan de Dios. Fue muerto el 18 de septiembre. El día 17 de septiembre fue detenido en su lugar de labores -Hospital San Juan de Dios- por efectivos del Regimiento Yungay de San Felipe. Al día siguiente de su detención, en la madrugada, fue ejecutado. Su cuerpo fue remitido por Carabineros al Instituto Médico Legal, organismo que estableció como causa de muerte: “heridas a bala facio cérvico torácica y torácica con salida de ambos proyectiles”. Allí fue reconocido por sus familiares el día 27 y retirado en esa misma fecha para su sepultación.

La Comisión estimó que en el caso relatado se produjo una violación a los derechos humanos, de responsabilidad de agentes del Estado, quienes ejecutaron a Raúl Francisco González Morán al margen de toda legalidad” (Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación: Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Volumen I. Tomo 1. Reedición elaborada por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Santiago de Chile, Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, diciembre de 1996, p. 152).

Sostiene que los hechos señalados anteriormente, a la luz de la normativa interna vigente a la época de su ocurrencia, son constitutivos del delito de secuestro calificado y aplicación de torturas; y, también, a la luz del derecho internacional, son **crímenes de lesa humanidad**, según lo establecido actualmente en el artículo 7 del Estatuto de Roma, pero cuya prohibición ya



Foja: 1

constituía norma de *ius cogens* a la época de los hechos perpetrados en perjuicio de doña Ana Scozia Sepúlveda.

En canto a la responsabilidad internacional del Estado de Chile, este ha reconocido y suscrito declaraciones y convenciones a nivel internacional, y se ha adherido a múltiples resoluciones emitidas por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, así como también ha otorgado vigencia a determinadas normas que se fundan en la costumbre internacional y los Principios Generales del Derecho, adquiriendo así en forma progresiva una serie de obligaciones internacional, que tienen como principal objetivo la obligación general de “respeto de los derechos esenciales del hombre” por parte de los Estados, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Dicha obligación se encuentra refrendada en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en concordancia con los preceptos que integran la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En lo concerniente a la responsabilidad del Estado de Chile según la normativa interna, que esta se encuentra consagrada en normas del Derecho Público chileno, en específico en el artículo 38 inciso 2° de la Constitución Política de la República, en donde se establece que “*Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley*”. Este precepto consagra una acción constitucional para hacer efectiva la responsabilidad de los organismos del Estado, cuando por su actividad provoquen un daño a una persona.

Controvierte la procedencia de aplicar las normas y principios del derecho privado a los casos de responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad, en efecto como ha quedado de manifiesto, la correcta resolución del caso *sub lite* requiere la aplicación armónica de la Constitución Política, de los tratados internacionales sobre derechos humanos y de la Ley de Bases de la Administración del Estado. A *contrario sensu*, en este conflicto son improcedentes las reglas propias del derecho de daños contenidas en el Código Civil, toda vez que dicho estatuto –como es fácil comprender – se construye sobre premisas y principios diferentes a los del derecho público y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, constituyendo un error de lógica y sistemática jurídica la aplicación de normas de derecho privado a las situaciones en que se persigue la responsabilidad del Estado por actos dañosos, ya que ambos difieren en su naturaleza y fines, destinado a otras conductas e intereses. (Al respecto, pueden revisarse además los Arts. 27 y 28 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados).

Luego cita abundante jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema Justicia pertinente al caso.

Sobre el daño provocado y el monto de la indemnización, en el caso de autos existe un daño de carácter moral que se expresa en dolor, sufrimiento,



Foja: 1

angustia, sensación de pérdida, rabia e impotencia ante una situación injusta e ilegítima que como hermana de don Raúl Francisco González Morán, le ha toca soportar a doña María González Morán. La dolorosa situación a la que se ha visto enfrentado configura un claro daño moral que -según la dogmática jurídica y la jurisprudencia nacional e internacional- amerita ser reparado a través de una indemnización, por ello solicita se condene al Fisco de Chile a pagarle al demandante la suma de \$100.000.000 a título de indemnización por daño moral.

Concluye en mérito de lo expuesto y normas jurídicas citadas, tener por interpuesta demanda de indemnización de daños y perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Juan Antonio Peribonio Poduje, ya individualizado, acogerla a tramitación y, en definitiva, condenar al demandado a pagar a la parte demandante doña María Rebeca González Morán la suma total de \$100.000.000, por concepto de aquellos daños morales que ha padecido con ocasión de los hechos cometidos por agentes del Estado en perjuicio de su hermano, don Raúl Francisco González Morán, o bien, en su defecto, a la suma de dinero que el tribunal en justicia considere adecuada, cantidad que deberá ser reajustada de acuerdo a la variación del IPC, desde la fecha de interposición de esta demanda y el pago efectivo de la indemnización que en definitiva se establezca, junto con los intereses legales correspondientes durante el mismo período y las costas de la causa.

Con fecha 07 de diciembre de 2020, mediante presentación de folio 11, doña Carolina Vásquez Rojas, Abogada Procurador Fiscal (S) de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, contesta la demanda solicitando desde ya su total rechazo conforme a los siguientes fundamentos de hecho y de derecho que expone.

Opone excepción de improcedencia de las indemnizaciones solicitadas por la demandante por preterición legal de doña María Rebeca González Morán y además por haber sido reparada en la forma que expresará.

Con respecto a la demanda indemnizatoria, ésta se desenvuelve en el marco de infracciones a los Derechos Humanos, cuya comprensión se da en el ámbito de la Justicia Transaccional, tanto en el Derecho Interno como en el Internacional.

Señala que con la dictación de la Ley 19.123 se realizó un esfuerzo trascendental de reparación, pues hizo posible atender a la necesidad de reparar económicamente a los familiares más directos, mediante prestaciones en dinero -preferentemente en cuotas mensuales- con lo que, sin desfinanciar la caja fiscal, permitió y permite que numerosas víctimas, obtengan mes a mes una reparación monetaria, sin que por ello el Estado deje de cumplir con sus otras obligaciones de interés público. Esta forma de pago ha significado un monto en indemnizaciones dignas, que han permitido satisfacer económicamente el daño moral sufrido por muchos.

Expone que en términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones ha significado, a diciembre de 2019, en concepto de: a) Pensiones: la suma de \$247.751.547.837.- como parte de las asignadas por la



Foja: 1

Ley 19.123 (Comisión Rettig) y de \$648.871.782.936.- como parte de las asignadas por la Ley 19.992 (Comisión Valech); b) Bonos: la suma de \$41.910.643.367- asignada por la Ley 19.980 (Comisión Rettig) y de \$23.388.490.737.- por la ya referida Ley 19.992; y c) Desahucio (Bono compensatorio): la suma de \$1.464.702.888.- asignada por medio de la Ley 19.123.- d) Bono Extraordinario (Ley 20.874): la suma de \$23.388.490.737. En consecuencia, a diciembre de 2019, el Fisco había desembolsado la suma total de \$992.084.910.400.-

Como puede apreciarse, el impacto indemnizatorio de este tipo de reparaciones ha sido bastante alto. Ellas son una buena manera de concretar las medidas que la justicia transaccional exige en estos casos, obteniéndose con ello compensaciones económicas razonables, que resultan coherentes con las fijadas por los tribunales en casos de pérdidas culposas de familiares.

Ahora bien, para que ello fuera viable, se determinó una indemnización legal, que optó por beneficiar al núcleo familiar más cercano; esto es, padres, hijos y cónyuge, pretiriendo al resto de las personas ligadas por vínculos de parentesco o de amistad y cercanía, quienes fueron excluidas, sin perjuicio de otras reparaciones satisfactivas a éstos últimos, los que, no obstante haber sido descartados de pagos directos en dinero, se les consideró en diversos desagravios de carácter simbólico y en programas, especialmente de salud, para reparar el daño moral, como se explicará.

Ello no es ajeno a otras normativas, en que, ante el *pretium doloris*, está limitada la determinación de quienes son los sujetos de daño por repercusión o rebote para deducir acciones pecuniarias, pues la extensión de la reparación económica debe zanjarse en algún punto.

Dice que en nuestro Derecho, se pueden traer a colación distintas normas, entre ellas, el artículo 43 de la Ley N°16.744, que prescribe que producida la muerte de un afiliado por accidente del trabajo o enfermedad profesional o si fallece el inválido pensionado, tendrán derecho de pensiones de supervivencia el cónyuge, hijos, madre de sus hijos naturales y los ascendientes o descendientes que le causaban asignación familiar. Así también, las normas sucesorias de los artículos 988 y siguientes del Código Civil establecen una prelación, en que los asignatarios más directos -hijos y cónyuge- excluyen al resto.

Al respecto, es claro que, siendo los recursos escasos, tiene que haber un límite que ponga fin a la línea de extensión reparativa y en el caso de las referidas demandantes, fueron preteridas por la ley como beneficiarias de una asignación en dinero por el daño que invocan, en beneficio de la cónyuge e hijo, sin que ello implique afirmar que no hayan obtenido una reparación satisfactiva por otra vía, como se explicará más adelante.

Sostiene que, sin perjuicio de lo anterior, la demandante preterida ha obtenido de todas formas reparación satisfactiva en cuanto demanda por el homicidio calificado de su hermano. En este acápite, agrega que el hecho que el demandante no haya tenido derecho a un pago en dinero, -por la preterición legal- no significa que no hayan obtenido reparación por el daño sufrido, por lo que alego la satisfacción de ésta.



Foja: 1

Dice que la reparación de las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones, las cuales describe, a saber: Reparaciones mediante transferencias directas de dinero (Ley 19.123 – Ley 19.980 – Ley 19.992 – Ley 20.874); Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y reparaciones simbólicas.

Posteriormente, en subsidio de la excepción de reparación integral alegada, opone a la demanda la excepción de prescripción extintiva, esgrimiendo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo Código, solicitando que, por encontrarse prescritas, se rechace la demanda en todas sus partes. Conforme al relato efectuado por el actor, la ejecución de la víctima de conformidad a lo expresado en la página 152 del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, ocurrió en la madrugada del día 18 de septiembre de 1973. Es del caso que, entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 19 de noviembre de 2020, igualmente ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2.332 del Código Civil. En consecuencia, opongo la excepción de prescripción de 4 años establecida en el artículo 2332 del Código Civil, pidiendo que se acoja y se rechacen íntegramente la acción indemnizatoria deducida como consecuencia de ello, por encontrarse prescrita.

En subsidio, en caso que el Tribunal estime que la norma anterior no es aplicable al caso de autos, opongo la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la anotada fecha de notificación de la acción civil que contesto, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2.515 del Código Civil. Asimismo, indica que no existe normativa alguna que establezca que en materia de Derechos Humanos, la acción derivada de un ilícito civil sea de carácter imprescriptible, citando al efecto jurisprudencia afín.

En subsidio de las defensas y excepciones precedente, opone alegaciones en cuanto a la naturaleza de la indemnización solicitada y los montos pretendidos, toda vez que la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva. Ha dicho la Excma. Corte Suprema: *“Por definición, el perjuicio moral no es de naturaleza pecuniaria. Esa fisonomía inmaterial que tiene, hace decir a los doctos que no se trata de calcular la suma necesaria para borrar lo*



Foja: 1

imborrable, sino procurar que el afectado obtenga algunas satisfacciones equivalentes al valor moral destruido”.

En subsidio de lo anterior, alega que la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los tribunales.

Finalmente alega la improcedencia del pago de reajustes e intereses, los que sólo pueden devengarse en el caso que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación, y además desde que dicha sentencia se encuentre firme y ejecutoriada.

Concluye, solicitando tener por contestada la demanda civil, y en definitiva, acoger las excepciones y defensas opuestas, y rechazar la demanda en todas sus partes con costas; o, en subsidio, rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido.

Con fecha 28 de diciembre de 2020, mediante presentación de folio 16, obra réplica del actor, sin incorporar nuevos hechos sustantivos a la causa.

Con fecha 12 de enero de 2021, a través de presentación de folio 18, consta dúplica del demandado, donde procede a reiterar las alegaciones, defensas y excepciones expuestas en la contestación del libelo.

Por tratarse de un Juicio Especial de Hacienda, se omitió el llamado a conciliación.

Con fecha 19 de noviembre de 2021 y modificada el 24 de octubre de 2022, se recibió la causa a prueba, rindiéndose la instrumental y testimonial que obra en autos.

En la causa se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

I.- En cuanto a las tachas.

1º) Que, el Fisco de Chile deduce tacha del artículo 358 n° 6 y 7 del Código de Procedimiento Civil en contra del testigo presentado por la actora, don Sergio David Gamboa Morales fundado en que de sus respuestas, se infiere claramente la estrecha e íntima relación que tiene con la demandante y su familia. En cuanto al interés, éste ratificaría un interés indirecto respecto del resultado del juicio.

Que, evacuando el traslado, el actor solicita el rechazo dado que respecto de la inhabilidad consagrada en el numeral 6 del artículo 358, tanto la jurisprudencia como la doctrina están de acuerdo en que el interés, directo o indirecto de un testigo, dice estrecha relación con un interés patrimonial, cuestión que no existe de las respuestas entregadas por el Sr. Gamboa. Sobre la inhabilidad del numeral 7, de lo respondido por el testigo, solo se desprende una relación estrecha mas no de íntima amistad.

2º) Que, en cuanto a la tacha del artículo 358 n°6 del Código de Procedimiento Civil, es menester para su configuración que de las respuestas



Foja: 1

emitidas por el testigo se desprenda que éste posee un interés directo o indirecto de carácter económico, situación última que no concurre en la especie al enunciar que declara en estrados por un tema estrictamente de Justicia. Por estas consideraciones, se rechaza la tacha invocada.

Respecto de la tacha del numeral 7 de la norma precitada, es indispensable mencionar que el solo reconocimiento del testigo respecto de la amistad es insuficiente para configurar la causal en cuestión, pues la misma debe ser manifestada en hechos graves que puedan ser calificados como tales por el Tribunal, situación última que no tiene lugar en autos. Por ello, se procede a rechazar la tacha, como se dirá en su oportunidad.

II.- En cuanto al fondo.

3°) Que, don Nelson Guillermo Caucoto Pereira y don Francisco Javier Ugás Tapia, abogados, ambos domiciliados en Doctor Sotero del Río N°326, oficina 1104, comuna de Santiago, compareciendo en representación de doña María Rebeca González Morán, pensionada, domiciliada en calle Manuel Rodríguez N° 2.553, comuna de Hijuelas, provincia de Quillota, deduce demanda de indemnización de daños y perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Juan Antonio Peribonio Poduje, abogado, ambos con domicilio en calle Agustinas n°1687, comuna de Santiago, conforme fundamentos de hechos y de derecho reseñados en la expositiva de esta sentencia, solicitando en definitiva condenar al demandado a pagarle al demandante la suma total de \$100.000.000, o bien, en su defecto, a la suma de dinero que el tribunal en justicia considere adecuada, cantidad que deberá ser reajustada de acuerdo a la variación del IPC, desde la fecha de interposición de esta demanda y el pago efectivo de la indemnización que en definitiva se establezca, junto con los intereses legales correspondientes durante el mismo período, todo ello con costas.

4°) Que, doña Carolina Vásquez Rojas, abogado Procurador Fiscal (S) del Consejo de Defensa del Estado, contesta la demanda solicitando su total rechazo conforme excepciones y alegaciones ya expuestas.

5°) Que, incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o esta, ello al tenor de lo preceptuado en el artículo 1698 del Código Civil.

6°) Que, a fin de acreditar sus dichos la parte demandante rindió prueba instrumental que se singulariza a continuación: copia de certificados de nacimiento de doña María Rebeca González Morán y de don Raúl Francisco González Morán, ambos emitidos por el Servicio de Registro Civil e Identificación; copia de certificación de defunción de don Raúl Francisco González Morán, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación; copia de certificado de Calidad de Víctima de don Raúl Francisco González Morán suscrito por la Subsecretaría de Derechos Humanos; copia de extracto de Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Tomo 1; copia de Sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema, Rol N° de ingreso N°8105-2018 de fecha 13 de junio de 2018; copia de Sentencia Rol CDH-2-2017 caratulada “Órdenes Guerra y otros vs Chile” dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; copia de Evaluación Psicológica –



Foja: 1

Informe de Daño elaborado por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) y; copia de documento denominado “Efectos Físico y Psíquicos en los Familiares de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos.

7º) Que, además rindió prueba testimonial que hizo consistir en la declaración de doña Jeannette Alejandra Valenzuela Navarrete, don Francisco Carlos Hernández Cruz y don Sergio David Gamboa Morales.

8º) Que, la parte demandada no rindió probanza alguna que ponderar. Sin embargo obra a folio 61 copia de respuesta oficio que ésta solicitara, esto es, ORD DSGT N°4792-10519 fecha el 13 de diciembre de 2022, emitido por el Instituto de Previsión Social el cual consigna que doña María Rebeca González Morán no ha recibido beneficio de reparación alguno.

9º) Que, doña María Rebeca González Morán ha comparecido a estrados invocando la calidad de hermana de don Raúl Francisco González Morán, quien fuera ejecutado sumariamente en septiembre de 1973.

10º) Que, del mérito de lo expuesto en la fase de discusión de estos antecedentes y lo consignado en los certificados de nacimiento acompañados en autos se tiene como hecho indubitado que doña María Rebeca González Morán es hermana por doble conjunción de don Raúl Francisco González Morán.

11º) Que, asimismo, del certificado suscrito por la Subsecretaría de Derechos Humanos, el Certificado de Defunción emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación y el extracto del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación Tomo 1 se tiene por acreditado que don Raúl Francisco González Morán fue detenido en el Hospital San Juan de Dios por efectivos del Regimiento Yungay de San Felipe, para luego ser ejecutado el día 18 de septiembre de 1973 producto de heridas a bala facio cérvico torácica y torácica con salida de ambos proyectiles.

12º) Que, el Fisco de Chile opone excepción de prescripción extintiva de la acción civil indemnizatoria, fundado en que a pesar de encontrarse suspendida la prescripción durante el período de dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 19 de noviembre de 2020, ha transcurrido con creces el plazo de prescripción extintiva que establece el artículo 2332 del Código Civil, o en subsidio aquel contemplado en el artículo 2515 del mismo cuerpo legal.

13º) Que, a fin de resolver la excepción de prescripción, cabe tener en consideración que la detención ilegal de demandante por agentes del Estado constituye un crimen de lesa humanidad y una vulneración a los derechos humanos. En efecto el hecho en cuestión vulnera lo dispuesto en el artículo 5.2 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, norma que establece que nadie debe ser sometido a torturas ni a tratos crueles inhumanos o degradantes, así si bien la acción indemnizatoria tiene un contenido patrimonial obedece a una índole humanitaria proveniente de los derechos de



Foja: 1

todo ser humano reconocidos éstos en el Tratado Internacional indicado, que prima sobre las normas de derecho interno, en especial del artículo 2497 del Código Civil.

14°) Que, resulta improcedente dar cabida a la aplicación de normas comunes contenidas en los cuerpos normativos internos como el Código Civil para resolver la contienda en cuestión; en tal sentido el artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos obliga a los estados parte a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades y el artículo 5 de la Constitución Política de la República que reconoce como limitación a la soberanía el respeto de los derechos esenciales que emana de la naturaleza humana y la obligación del mismo de promover dichos derechos fundamentales.

15°) Que, dado que los derechos reconocidos en la Convención son inherentes al ser humano durante toda la existencia de éste, no es posible sostener a juicio de esta sentenciadora que un Estado pretenda desconocer la reparación necesaria y obligatoria por el mero transcurso de éste, ya que ello significaría desconocimiento del Derecho Humano conculcado.

16°) Que, sustenta lo anterior el artículo 131 del Convenio de Ginebra que sostiene que ninguna parte contratante podrá exonerarse, ni exonerar a otra parte contratante, de las responsabilidades en que haya incurrido ella misma u otra parte contratante a causa de las infracciones previstas en el artículo 130 en el que se incluye la tortura o tratos inhumanos.

17°) Que por lo demás, el que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad establezca en su artículo 4° la imprescriptibilidad de la acción penal a los crímenes mencionados en el artículo 1 entre otros, esto es los de lesa humanidad no conlleva necesariamente la exclusión de la imprescriptibilidad de la acción civil, máxime considerando el contexto del preámbulo de la convención en análisis, en especial aquellos de los párrafos 3, 4, 6 y 7.

18°) Que a la luz de lo que se ha venido diciendo no cabe sino el rechazo la excepción de prescripción.

19°) Que, en cuanto a la excepción de preterición el Fisco de Chile ha indicado que la demandante ha sido preterida legalmente, determinándose por el Estado que la indemnización legal beneficiaría al núcleo familiar más cercano, esto es, padres, cónyuge e hijos, quienes son beneficiarios de la ley 19.123 que estableció una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a las personas afectadas por violaciones a los Derechos Humanos, además de la existencia de otras prestaciones que detalladamente se reseñan en la expositiva, alegando con esto la reparación satisfactiva por la ejecución sumaria de don Raúl Francisco González Morán.

20°) Que, encontrándose la fuente de la responsabilidad civil del Estado basada en normas y principios de derecho internacional de Derechos Humanos, y no habiéndose limitado en dichos preceptos la reparación a un



Foja: 1

determinado grupo de familiares, beneficiando a unos por sobre otros, la excepción no podrá prosperar como se dirá en lo resolutivo del fallo.

21°) Que, finalmente el demandado deduce excepción reparación integral fundado en que el demandante ya ha sido indemnizado, ello en virtud de la dictación de la Ley N°19.123 que dispuso la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, la que se ha realizado a través de transferencias directas de dinero, asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas y reparaciones simbólicas.

22°) Que con dicha alegación el Fisco reconoce, en el caso concreto, una necesidad de reparación y como consecuencia de ello un daño, el que esta sentenciadora entiende que corresponde al daño moral, esto es, toda afección que acarrea un agravio en la afecciones legítimas o de un derecho subjetivo inherente e inmaterial de una persona e imputable a la otra.

En el caso de autos, el perjuicio antes señalado se entiende corresponder al daño moral del actor el que hizo consistir en sufrimiento y angustia irrogada por la ejecución sumaria de su hermano, don Raúl Francisco González Morán

23°) Que efectivamente, tal y como lo señala el demandado al contestar la demanda, se han efectuado por el Estado chileno distintos y variados esfuerzos una vez terminado el régimen militar, de resarcimiento de perjuicios mediante pensiones asistenciales y simbólicas a todos aquellos que se encuentran en una situación como la de los demandantes, las que han tenido un carácter general buscando una solución uniforme, abstracta, sin considerar la situación específica y particular de los familiares cuyo dolor fue causado por agentes del Estado en dicho período, ello no configura lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que obliga al pago de una justa indemnización a los lesionados, esto es, a cada persona en específico, esta sentenciadora no considera acorde a la norma internacional mencionada que obliga al Estado chileno en virtud del artículo 5° inciso 2° de la Constitución Política de la República, por lo que se desestimaré la alegación de suficiencia de pago.

24°) Que, dada la insuficiencia del pago antes anotada, cabe tener consideración que es menester que los actores acrediten el daño consecuente de la muerte del señor Gonzáles Morán.

Al efecto rindió prueba instrumental consistente en copia de Evaluación Psicológica – Informe de Daño suscrito por la Psicólogo doña Graciela Carrasco C., del Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS), el cual previo estudio de antecedentes, establece que doña María Rebeca González Morán presenta una reexperimentación del trauma, con síntomas ansioso - depresivos que constituyen algo propio de un síndrome clínico de trastorno de ansiedad generalizada ello debido al evento ocurrido respecto de su hermano durante el año 1973 cuyo recuerdo le indujo a desarrollar un trastorno depresivo leve con patrón clínico de personalidad de tipo esquizoide que afecta su calidad de vida y desarrollo biopsicosocial adaptativo.



Foja: 1

25°) Que, también rindió prueba testimonial consistente en la declaración de doña Jeannette Alejandra Valenzuela Navarrete, don Francisco Carlos Hernández Cruz y don Sergio David Gamboa Morales, quienes ilustran al tribunal que la Sra. María Rebeca presenta una depresión de base, la cual fue mayormente desarrollada luego del fallecimiento inesperado de su hermano, indicando que les consta que ésta ha necesitado atención psicológica, notándose retraída en ciertos encuentros sociales.

Especial consideración se tiene respecto de los dichos del testigo Gamboa Morales quien afirma que, en su presencia, doña María Rebeca ha sufrido lapsos de angustia y algunas crisis de pánico derivadas directamente por la pérdida de su hermano.

26°) Que, los antecedentes probatorios precitados se encuentran revestidos de una congruencia suficiente para que esta Sentenciadora pueda concluir que la demandante naturalmente ha sufrido una aflicción extrapatrimonial producto de la ejecución sumaria cometida en la persona de su hermano don Raúl Francisco González Morán, la cual debe conforme a criterios de justicia y equidad, ser indemnizada, razón por la cual esta Magistrado dará lugar a la acción indemnizatoria solicitada respecto del daño moral sufrido por la actora, el que esta Juez estima prudencialmente en \$40.000.000.

27°) Que, en cuanto a la solicitud de reajustes e intereses, atendida la naturaleza declarativa de la presente sentencia, las sumas ordenadas deberán enterarse debidamente reajustadas de acuerdo a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor, más intereses corrientes para operaciones de crédito reajustables en moneda nacional, contabilizados desde que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada y hasta que se efectúe el pago efectivo.

28°) Que los demás antecedentes allegados al proceso en nada alteran lo resuelto precedentemente.

Y atendido lo antes razonado y lo dispuesto en los artículos 160, 170, 748 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; artículo 48 del Código Orgánico de Tribunales; artículos 2332 y 2497 del Código Civil; Ley N° 19.992, ley N° 19.123; artículo 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo 14.1 de la Convención sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes; artículos 1.1, 2 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; los Principios 15, 18 y 20 de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, se declara:

I.- Que se rechaza la tacha del artículo 358 n° 6 y 7 deducida en contra del testigo Sergio David Gamboa Morales;

II.- Que se rechazan en todas sus partes las excepciones de prescripción, preterición y reparación integral;

III.- Que se acoge la demanda de autos respecto del daño moral reclamado, daño que esta sentenciadora estima prudencialmente en la suma de



Foja: 1

\$40.000.000 a favor de doña María Rebeca González Morán, pagaderos en la forma establecida en el fundamento vigésimo séptimo de este fallo;

IV.- Que se condena en costas a la demandada.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

Dictada por doña Claudia Donoso Niemeyer, Juez Titular; autorizada por don Erwin Emir Cárdenas Jofré, Secretario Subrogante.-

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, treinta y uno de Marzo de dos mil veintitrés**

